

UNA NUEVA POLÍTICA EXTERIOR PARA CHILE

Claudio De Negri

Periodista, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile.

Chile ya no volverá a ser el mismo. El inédito hecho de enfrentar cuatro elecciones simultáneas para renovar el Parlamento, los consejos regionales y la Presidencia de la República, además de una Convención para aprobar democráticamente una nueva Carta Magna, son señales del inicio de una nueva etapa de la historia nacional.

Por su parte, la pandemia nos recordó que vivimos en un mundo cruzado por fenómenos que no reconocen fronteras, y que no tomarlos en debida consideración equivaldría a la imagen de una embarcación que navega a la deriva, sin un horizonte claro.

La nueva Constitución, para expresar el anhelo democrático que le dio origen, requerirá abordar cambios estructurales relacionados nada menos que con la definición del carácter del Estado y la sociedad chilena para este tiempo, lo que incluye como perspectiva un nuevo modelo de desarrollo sostenible basado en la democracia, la justicia social y la soberanía nacional.

La dimensión de tales desafíos, sumados a las profundas transformaciones que vive el planeta, interpelan a la relación de Chile con el mundo en este nuevo marco. El Estado de Chile requiere de una actualización de su política exterior basada en los preceptos de una Constitución Política dotada de las definiciones necesarias para enfrentar los fenómenos que caracterizan a la actual comunidad internacional y su futuro.

Nuestro país ha suscrito 29 Tratados de Libre Comercio con 65 economías del mundo. Entre ellos su proyecto estrella, el TPP-

111, aún en espera de su ratificación por el Parlamento, es a la vez objeto de fuertes críticas de parte de diversas organizaciones políticas y sociales dada su condición de exponente de las mismas políticas neoliberales ampliamente rechazadas por la población, particularmente en los últimos años.

La firma por el Presidente Gabriel Boric del Acuerdo de Escazú, promovido en su génesis por Costa Rica y Chile para mejorar el acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe, en el último momento había sido vergonzosamente negada por el ex Presidente Piñera. Este acto ha sido leído como señal auspiciosa para la política exterior de nuestro país, que requerirá de criterios de realidad y flexibilidad en aras de la participación de Chile en el desarrollo del multilateralismo, promoviendo una posición constructiva de unidad en la diversidad para una región dinámica que, por sobre esa misma diversidad, sin embargo reclama de una mirada conjunta frente a sus problemas comunes y objetivos de soberanía y desarrollo. Desafíos como las crisis en materia migratoria, sanitaria, hídrica, ambiental y de las relaciones comerciales, entre otras, así lo indican.

Ningún sector pone en duda la necesidad que Chile tiene de la inserción internacional, pero el debate radica en si esta se

¹ “Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico”, es un tratado comercial orientado al Asia Pacífico que involucra a Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

ajusta a un modelo neoliberal en crisis, o abriendo nuevos horizontes que permitan traspasar esos cercos, coloquialmente graficados en la necesidad de avanzar a una nueva relación con el comercio internacional donde “les vendemos las naranjas y les compramos el jugo”. Se trata, a fin de cuentas, de una expresión más de la controversia entre neoliberalismo y democracia, ahora en el plano de nuestra relación con el mundo.

Las manifestaciones populares que en el último tiempo pusieron a Chile ante los ojos de la comunidad mundial, lo hicieron por el rechazo explosivo a la idea de seguir viviendo como hasta ahora, aunque no sólo en términos económicos. “No son treinta pesos, son treinta años”, surgió como expresión del sentimiento acumulado por la población frente al modelo y su institucionalidad; a la política de “la medida de lo posible” ajustada a la Constitución impuesta por la dictadura, y al espejismo de un crecimiento económico que se ha traducido en la profundización de las desigualdades y la concentración de la riqueza. Todo indica que no basta con la simple adhesión al libre comercio en los términos aplicados hasta ahora, que requieren ser reformulados conforme si se quiere abrir paso a una nueva era.

Las reivindicaciones políticas y económicas se funden con los cambios culturales contra el patriarcado y la reivindicación de los pueblos originarios, con la defensa del medio ambiente y la condena a la corrupción y la impunidad. Saltó por los aires el dogma de que no hay más opción que resignarse al actual orden de cosas, y la convicción de que otro mundo es posible se escuchó en cada rincón.

La revuelta obligó a todos los sectores a aceptar que el país vivía una crisis de fondo. Diagnosticado el padecimiento, se colocó en el centro el debate sobre el camino para salir de éste, teniendo como centro que su solución será inseparable de las profundas transformaciones, conflictos e incertidumbres que en estos días vive el mundo.

En medio de la crisis global

Ya en el marco de las primarias presidenciales, el Proyecto Programático de Daniel Jadue, en su condición de pre-candidato de “Chile Digno” señaló que el planeta “se enfrenta a una crisis sistémica de carácter civilizatorio expresada en la emergencia de problemas globales como el cambio climático y el deterioro de la Madre Tierra, que amenazan la supervivencia a largo plazo de la especie humana y los ecosistemas, provocados por un modelo de desarrollo insostenible. En un contexto de acelerada desestructuración global, se produce una concentración del poder en actores transnacionales, como son los gigantes tecnológicos y financieros. Además, tiene lugar una reconfiguración del orden internacional, que avanza hacia una multipolaridad difusa, caracterizada por el declive de EE.UU y Europa, el ascenso de China y la emergencia de otros actores, el tránsito del centro del mundo desde el Atlántico al Pacífico, y el debilitamiento del multilateralismo. Surge así la necesidad de articular un polo latinoamericano y caribeño autónomo que participe de la construcción de un nuevo orden internacional, esfuerzo del que Chile debe ser parte activa”.

En el mismo período el programa del hoy Presidente de la República Gabriel Boric, análogamente planteó “desarrollar una política exterior que sea coherente y consciente con las ambiciones y las demandas del nuevo Chile que está naciendo con el proceso constituyente: una política exterior turquesa (verde y azul), feminista, inclusiva, anti racista, descentralizada y participativa.” Como principios, estableció “la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las diferencias entre Estados y naciones mediante la mediación multilateral y la no intervención en asuntos internos de otros Estados”.

En julio de 2021, desde México el Presidente Antonio Manuel López Obrador, en conmemoración ante los presidentes latinoamericanos por el 238° aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar, sen-

tenció que “ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América”. Su discurso abogó por el reemplazo de la Organización de Estados Americanos (OEA) por un organismo verdaderamente autónomo, que hable por todos y con voz propia. Rechazó “el predominio de Estados Unidos en el Continente” y su intervencionismo en aras de los movimientos conservadores en el marco de la denominada doctrina Monroe (“América para los americanos”), que ha derivado en su pretensión de sostenerse como “la nueva metrópoli hegemónica” desde la independencia de España. Su discurso incluyó el rechazo al bloqueo contra Cuba “y otras operaciones abiertas o encubiertas al Sur del Río Bravo”. También refiriéndose a Estados Unidos, AMLO llamó a “hacer valer nuestra soberanía”, proclamó que “no somos más un protectorado ni su patio trasero”, instó a fortalecer el mercado regional, defender la autodeterminación y la no intervención externa en la definición de los destinos de los países. Además, sostuvo que el modelo aplicado en la región los últimos dos siglos “está agotado y no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie”.

Son múltiples las señales de que América Latina y el Caribe conforman una región en disputa, que pese a su diversidad y dinamismo interno requiere con urgencia de una visión conjunta frente a sus problemas comunes, que son objetivos y persisten incluso más allá del signo político de los gobiernos temporales de cada país, puesto que al final del camino indistintamente terminan todos chocando con la misma piedra que les impide su desarrollo.

No son voces aisladas. En la VI Reunión Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) efectuada en México en septiembre de 2021 con la presencia de 17 mandatarios, en su condición de anfitrión y Presidente Pro Tempore de ésta, López Obrador volvió sobre los mismos contenidos con el apoyo de una parte de quienes acudieron a la cita, aunque sin lograr acogida en los representantes de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y

Paraguay para la propuesta de reemplazar a la OEA. El mapa político quedó dibujado.

La Declaración Final consignó la unanimidad sobre 44 puntos relacionados con las crisis sociales, económicas y culturales; los lineamientos para lograr la autosuficiencia sanitaria de la región; la educación; la igualdad de género, la discriminación a grupos vulnerables y la degradación de la biodiversidad. También aprobó siete declaraciones especiales sobre el fin del bloqueo de EE.UU. contra Cuba; las islas Malvinas; Puerto Rico; la COP 25 sobre crisis climática y desarrollo sostenible; los pueblos indígenas y el Covid-19 y la creación de un instituto de lenguas indígenas. Sin embargo, la propuesta de superar la OEA no contó con la unanimidad de los países participantes, aún considerando que esta instancia no incluye Estados Unidos ni Canadá.

La cumbre de Latinoamérica y el Caribe mostró una región cruzada por la contraposición de dos visiones estratégicas. Mientras un conjunto de países procura la integración regional y la sustitución de la OEA, otro grupo, incluido el entonces Gobierno de Chile, tomaron posición junto a Estados Unidos para bloquear esta convergencia.

EE.UU, China y el “triángulo rojo”.

La estrategia exterior aplicada por Washington se desarrolla simultáneamente en dos planos diferenciados. De una parte ha trazado una suerte de “triángulo rojo” conformado por Cuba, Venezuela y Nicaragua, para quienes implementa un tratamiento implacable que incluye el bloqueo económico y comercial, el apoyo abierto a las acciones desestabilizadoras de la oposición local y una guerra comunicacional de escala global, mientras simultáneamente para los países restantes se esmera en un trato diferido con el propósito de disuadirlos de la mínima relación con “el triángulo del mal” haciéndolos optar entre el palo y la zanahoria, ofreciéndoles ciertos apoyos y garantías para su estabilidad política y eco-

nómica, ante la evidencia de lo que ocurriría a quienes intenten un camino diferente. Es la lógica heredada desde la guerra fría, que hoy aplica con nuevos componentes y en un nuevo escenario.

Como trasfondo, se encuentra el interés de Estados Unidos por frenar la creciente presencia económica de China en la región, asunto que considera clave para sostener su prevalencia sobre el hemisferio.

En términos locales, China es ya el primer socio comercial de Chile, con el 23% de las exportaciones nacionales. Ambos países suscribieron un acuerdo de Asociación Estratégica Integral en 2016, profundizado en 2017, y en 2018 Santiago fue sede de la 2° Reunión Ministerial CELAC- China.

En 2021, aún con los efectos provocados por la pandemia, China totalizó 30 proyectos de inversión en Chile por US\$ 5.646 millones, cifra que ya supera el monto alcanzado en esta materia por Estados Unidos.²

Pero nuestro país no es un caso aislado. Su situación se enmarca en la declinación de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial, particularmente con la presencia internacional alcanzada por China y Rusia, al tiempo que tradicionales aliados de Washington enfrentan sus propias crisis que los arrastran a sucesivas contradicciones e incertidumbres. A ello se suma la irrupción de otras economías emergentes como India y Sudáfrica, que corroboran que la hegemonía de Estados Unidos ya no tiene la fuerza de antes. La incertidumbre provocada por la guerra comercial contra China proclamada por Donald Trump, de cuyos efectos ningún país ha podido permanecer al margen, ha dado paso a una suerte de expectación internacional en la medida que se consolida la proyección de que en los próximos años el gigante asiático ostente el primer lugar en la economía global.

Con motivo del Centenario del Partido Comunista de China en junio de 2021, el Presidente Xi Jinping reafirmó sus anteriores declaraciones señalando el propósito de

² Datos de Invest Chile.

su gobierno de ofrecer “una nueva gobernanza al mundo” y el rechazo a la idea de que la hegemonía global pueda radicar en un solo país.

Como contraposición a esta tendencia, creciente aún después de Trump, la Administración Norteamericana continúa imponiendo sanciones unilaterales; presiona política, económica y militarmente, controla instituciones internacionales y destina cuantiosos recursos financieros a incidir al interior de los países para cambiar gobiernos cuando no les gustan y despliega un enorme poderío comunicacional para contrarrestar el surgimiento de un mundo que ya no responde como antes a su pretensión unipolar luego de la desaparición de la Unión Soviética. Esto, sin dejar de lado la presencia de 76 bases militares de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en la región, entre otros factores.

Ucrania

La comunidad política internacional duerme con un solo ojo ante las noticias que recibimos a cada minuto sobre Ucrania. Lamentablemente en nuestro caso, todas ordenadamente ajustadas a las pautas centralmente organizadas por una de las partes del conflicto mediante el enorme poderío mediático de las cadenas noticiosas de Estados Unidos, que omiten aspectos cruciales del mismo. Es ya conocido que las comunicaciones forman parte relevante en estos conflictos cuyo trasfondo, a fin de cuentas, responde a la contraposición de objetivos políticos a los que se ordena el despliegue de la fuerza militar, sanciones económicas y diplomáticas y, por supuesto, la versión dominante en la opinión pública.

Es obvio el rechazo generalizado a la guerra como recurso para resolver los conflictos, más aún cuando ésta nos coloca al borde de un desastre nuclear o que, aún si aquello no llegara a ocurrir, el costo finalmente lo padecerán los pueblos.

Pero decir una parte de la verdad y deliberadamente ocultar la otra equivale a

mentir, a “tirar la piedra y luego ocultar la mano”. Los conflictos tienen una causa que los origina y no todo se explica suficientemente por los últimos acontecimientos (movilización de tropas de Rusia fuera de sus fronteras), que son la punta del iceberg que se remonta incluso más allá del golpe de Estado en Ucrania en febrero de 2014, promovido por EE.UU, la OTAN y la UE con la colaboración de grupos fascistas locales cuya rusofobia se empeñó en el aplastamiento de las protestas en Crimea, en una campaña que incluyó quemar vivos a 48 sindicalistas en Odessa, por ser considerados pro rusos.

Los hechos se enmarcan en la persistente embestida de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, alianza bélica surgida en tiempos de la Guerra Fría para hacer frente al bloque de países socialistas, pero que no se extinguió luego de la disolución de la Unión Soviética, mientras que el Pacto de Varsovia junto con ella dejó de existir.

La OTAN actúa como “brazo militar” de EE.UU. y sus aliados incluso para incidir en el escenario internacional aún después de la disolución del bloque de países socialistas de Europa del Este como centurión para ampliar su presencia en esta región. En este caso se evidencia el interés por reducir la incidencia de Rusia y su alianza estratégica con China, identificada como el gran obstáculo para la alicaída hegemonía mundial de Washington. Es el “espíritu” que, con sus propias particularidades, antes ha estado presente también en Siria, Irak, Irán, Libia, Palestina, Yemen, y otros países, con intervenciones militares directas e indirectas. Una interpretación sería lo que ocurre en Ucrania requiere de la necesaria distinción de los hechos puntuales con los factores estructurales.

Como referencia está el Protocolo de Minsk, capital de Bielorrusia, que en 2014 contó con el auspicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y que se suscribió con el fin de detener el conflicto en Ucrania y tuvo como marco el principio de poner freno a la expansión de alianzas bélicas - como la

OTAN – y de no procurar la seguridad de un país a costa de otro.

En este caso ocurre justamente lo contrario: la pretensión de sumar Ucrania a la OTAN ha sido explícita y ha generado la reacción del Gobierno de la Federación Rusa, que acusa la pretensión de instalar por esta vía una base militar de la OTAN en un país fronterizo. La situación sería comparable con la denominada crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando la URSS estableció una base en la isla que fue categóricamente rechazada por EE.UU. bajo el mismo argumento, y que debió ser retirada para evitar una confrontación nuclear.

Más allá de lo militar, el analista chino Alex Lo (South China Morning Post), señala que Estados Unidos se dio cuenta “demasiado tarde” de su error estratégico global y que ahora procura evitar que sus sanciones unilaterales contra Rusia profundicen la interacción del Kremlin con China e Irán. Se podría agregar que la tensión impuesta por EE.UU, Ucrania y el Reino Unido para debilitar a Rusia tanto en su interior como en sus relaciones internacionales mediante la prolongación del conflicto, implican posibles problemas de suministro de petróleo, energía y alimentos y podrían afectar la influencia de la Administración Norteamericana en Asia y sus aliados de Europa, además de los efectos políticos y sociales que la situación provocaría también al interior de Estados Unidos, que en 2021 consumía 700 mil barriles diarios de crudo importado desde Rusia, carencia que lo ha obligado a negociar con Venezuela pese a sus anteriores declaraciones y sanciones unilaterales. Están por verse las repercusiones del nuevo cuadro para el Partido Demócrata en las elecciones de noviembre de este año.

Confrontación global y local

Los países de América Latina y el Caribe han pasado por sucesivas etapas en su pasado reciente. Al denominado ciclo progresista con el que ingresaron al siglo XXI, devino una restauración neoliberal que recurrió a los denominados golpes blandos

para provocar cambios de gobierno con activa participación de EE.UU, como ocurrió en Honduras contra Manuel Zelaya en 2009; en Paraguay contra Fernando Lugo en 2012; en Brasil contra Dilma Rousseff en 2015 y luego para inhabilitar candidatura de Lula 2016-2017; o en Bolivia contra Evo Morales en 2019.

No parece difícil comprender esta mirada a partir de nuestra propia historia nacional. Abundante documentación públicamente disponible confirma que el gobierno de Richard Nixon, ya antes de que Salvador Allende asumiera la Presidencia, había adoptado la decisión e impartía instrucciones para derribarlo. Los hechos posteriores son dramáticamente conocidos.

El choque del capitalismo neoliberal con los movimientos populares y la izquierda ha evidenciado la confrontación entre dos proyectos globales contrapuestos, aun cuando en muchos casos no se trate ya de la disputa entre capitalismo y socialismo, sino de la intolerancia ante quien ose definir, conforme a sus propias realidades y de manera soberana, un trazado de su destino nacional distinto de la visión norteamericana.

Tanto los efectos de la pandemia como la agudización de los conflictos sociales provocados por las políticas neoliberales, han generado particular expectación en torno a las sucesivas confrontaciones electorales presidenciales en los países de la región. Los resultados de los comicios en México, Argentina, Perú, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Chile ya marcan la tendencia hacia un giro en la correlación regional, a la que podrían sumarse este año una victoria de Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia.

El síndrome de la guerra fría que persigue a la política de Washington, ahora obsesionada en su reedición mediante la teoría de las guerras “de cuarta generación”, a diferencia de las décadas pasadas de su confrontación con la Unión Soviética, enfrenta un escenario más complejo producto de que China, su adversario actual, despliega una estrategia internacional caracterizada

por un pragmatismo que no ha discriminado según el signo político de los gobiernos en sus relaciones.

A lo urticante que resulta para la Casa Blanca la presencia internacional de China, se suma lo demoledora que ésta ha resultado para su discurso ideológico destinado a establecer que, luego de la caída de la URSS, no quedaría más que la resignación a un mundo regido por las reglas del capitalismo neoliberal como último estadio posible de la historia de las sociedades. La realidad ha sido más fuerte, y más allá de la adscripción o no de los pueblos al tipo de régimen que conduce los pasos de China, su experiencia concreta es vista como constatación de que el dogma neoliberal no es una fatalidad y que existe la posibilidad de abrir paso a otras formas de desarrollo y convivencia de la comunidad mundial.

Nadie saldrá solo.

Asumir que el mundo es cada vez más globalizado e interdependiente, supone que será a la vez más complejo que un país por sí solo, separado de los demás, logre materializar sus aspiraciones de desarrollo y soberanía.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008 con la participación de doce Estados de la región más Panamá y México como observadores, en su documento fundacional se propuso “construir de manera participativa y consensuada un espacio de unión cultural, social, económica y política entre los pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados”.

Unasur fue vista como alternativa frente a la dominación que Estados Unidos ejerce

sobre la región a través de la OEA y mantuvo su funcionamiento hasta 2018, cuando la nueva ofensiva de norteamericana contra Venezuela derivó en la suspensión de la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.

Como parte de la misma confrontación, en 2019 los presidentes Duque de Colombia y Piñera de Chile promovieron la creación de Prosur, con la incorporación de los gobiernos de Argentina, Brasil, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú. Colocaron como objetivos centrales la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a la libertad y los Derechos Humanos, aunque la inspiración de fondo era el abandono de los principios de Unasur para restablecer la primacía conservadora. Los hechos posteriores lo dejarían a la vista luego del bochornoso montaje de Piñera y Duque en Cúcuta para promover el golpe en Venezuela; el disciplinado silencio de Prosur ante el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia; su nula condena a las violaciones de Derechos Humanos durante la revuelta en Chile y los más de doscientos dirigentes sociales hasta entonces asesinados en Colombia. En el mismo período, el gobierno de Lenin Moreno en Ecuador impedía por todos los medios la participación del ex Presidente Rafael Correa en las elecciones mediante el típico lawfare, recurriendo a la manipulación de la justicia. Los países alineados con Estados Unidos en el combate contra el gobierno de Maduro en Venezuela, argumentando la defensa de los principios democráticos, simultáneamente hicieron vista gorda de la instrumentalización del Parlamento por la oposición golpista y de la utilización del sistema judicial en Brasil, mediante un proceso que luego fue declarado viciado, para destituir a Dilma Rousseff e inhabilitar a Lula como candidato presidencial para despejar el camino a Bolsonaro.

Tampoco queda ajeno a la operación el Grupo de Lima, creado en agosto de 2017 con el propósito de apoyar a la oposición venezolana contra el gobierno de Nicolás Maduro. Durante el anterior gobierno de Sebastián Piñera, éste formó parte activa

en la creación de la Alianza del Pacífico en 2011 junto a los gobiernos de Colombia, Perú y México, que en ese momento compartían una orientación política de derecha contraria a los principios de Unasur, situación que ha variado luego de las elecciones en los respectivos países.

Desde su creación en 1948 - con Estados Unidos como hermano mayor en el marco de la Guerra Fría - la OEA ha sido referencia permanente en América Latina y el Caribe, ya sea para quienes procuran su reemplazo como para los gobiernos alineados con Washington. Venezuela es el segundo país de la región, después de Cuba, en renunciar a su participación en la OEA, en este caso por considerarla "un vehículo de intervenciones abiertamente lesivas de los principios y del Estado de Derecho internacional", acusación que se consolidó luego que esta aceptara a Gustavo Tarre como representante del autoproclamado "Presidente Encargado" de Venezuela, Juan Guaidó.

Así, los espacios multilaterales son tensionados por la confrontación entre el orden internacional hegemónico por Estados Unidos y los países que buscan zafarse de un sistema de relaciones donde unos ponen las materias primas, los costos ambientales y la mano de obra barata, mientras los otros controlan el capital financiero, las tecnologías, los mercados y las decisiones.

La confrontación, si bien coloca en primer plano la ofensiva norteamericana contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, también choca con la posición de otros países de la región que coinciden en la necesidad de cambiar los términos imperiales de la relación con Estados Unidos.

Vivimos en medio de la tendencia a una transformación estructural del sistema político mundial en el que surge la disyuntiva entre la confrontación o la cooperación y el intercambio justo; en la contraposición entre el unilateralismo y el multilateralismo; en la hora de asumir nuevas reglas en la medida que comprendemos que se encuentra en juego la propia sobrevivencia de la humanidad.

Conceptos contrapuestos y términos comunes.

La lógica formal define al término como "signo convencional de un concepto". Sin embargo, el debate acerca de la globalización no pareciera ser el caso, toda vez que es verbalizada indistintamente por discursos que la aluden para representar concepciones contrapuestas sobre la misma.

Ya nadie pareciera cuestionar que la economía y el comercio, los conflictos sociales, la cultura y las ciencias, las comunicaciones, el calentamiento global, el derretimiento de los glaciares y las pandemias, los conflictos bélicos y el narcotráfico, entre múltiples otros, son un hecho objetivo y trascienden fronteras geográficas y condicionan la vida del conjunto de la humanidad. Sin embargo, la sola constatación de esas realidades sin abordar sus causas de origen y la forma de enfrentarlas, deja espacio para continuar reproduciendo la globalización en los términos que presenta hasta ahora, en lugar de asumir la necesidad de revertir su carácter.

Una posibilidad es que tras este fenómeno se encuentre un relato cuya orientación ha tenido como centro la disociación del análisis de los procesos sociales respecto de su origen y significación política, o la denominada despolitización y desideologización de los movimientos sociales. Lo paradójico del caso es que a menudo se trate de interpretaciones profusamente promovidas por sectores política e ideológicos nitidamente definidos. Baste recordar para ello el discurso de Pinochet contra "los señores políticos". Tampoco debiera extrañar la actual crisis de credibilidad de diversas instituciones cuyos representantes abogan indistintamente por valores universales como la libertad, la democracia o la justicia social y otros, aunque implícitamente con sentidos contrapuestos.

El término globalización comenzó a utilizarse en los años ochenta y tuvo como origen la visión de los mercados, pero hacia fines de la década en torno al denominado Consenso de Washington (1989) y su

paquete de medidas para salir de la crisis financiera, la globalización consolidó su carácter neoliberal.

El profesor de Harvard Theodore Levitt, seguidor de los "Chicago Boys" liderados por Milton Friedman y la experiencia de los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, en los años ochenta definió a la globalización como "un proceso dinámico de creciente libertad e integración de los mercados de trabajo, bienes y servicios, tecnología y capitales".

Entre quienes han refutado esa visión, el profesor de la UBA Carlos María Vilas caracteriza a la globalización por "sus elevados niveles de concentración y centralización del capital, predominio del capital financiero, mundialización del capitalismo como modo de producción y estilo de vida, diseño de un sistema internacional de dominación conducido por las economías más desarrolladas".³

Batalla de multitudes

Pero la disputa no se restringió al mundo académico y se hizo multitudinaria. De ello dan testimonio las masivas movilizaciones protagonizadas en torno a la "Batalla de Seattle" en 1999 contra el concepto de globalización proclamado por la Organización Mundial de Comercio; los miles de dirigentes sociales e intelectuales de cuarenta países congregados en 1996 en Chiapas para cuestionar "el pensamiento ideológico que avala el orden mundial como única interpretación posible de la realidad"; o los posteriores encuentros organizados por el Foro Social de Puerto Alegre el año 2001 con 15 mil asistentes de 117 países, y que en su reedición el año siguiente duplicó su masividad. Ellos trazaron una línea en el debate sobre la globalización y lo llevaron a las organizaciones sociales, a la izquierda y a la manifestación callejera.

³ ("Globalización o imperialismo". Revista Realidad Económica. N.º 174 agosto – septiembre 2000).

Complementariamente, ante sectores que se planteaban frente a la globalización neoliberal evitando abordar el rol central que en ella tiene el imperialismo, el cientista político Atilio Borón advertía que “la presencia de un discurso mistificante de la globalización ha desembocado en la exaltación de un pensamiento único que clausura con su falso realismo y su resignado posibilismo la capacidad de pensar políticas alternativas y de ver las perniciosas consecuencias económicas, sociales y políticas de aquellas que se están implementando” 4. También en esos días, Juan Ignacio Ramonet fustigaba al concepto de pensamiento único como la imposición de un “consenso ideológico aplastante”.

Transcurridas dos décadas, la polémica ha acrecentado su vigencia hasta el punto que entre los propios seguidores de los acuerdos de Bretton Woods, que al inicio de la Guerra Fría dieron lugar a la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, destinados a regir al capitalismo, surjan voces sobre la pertinencia de revisar las formas de su aplicación en aras de una suerte de reconversión del neoliberalismo mediante ciertos ajustes para sortear su incapacidad como sistema sostenible.

Nuevo formato.

La crisis ha acentuado la confrontación ideológica, de visiones sobre el carácter de la globalización y la interdependencia de países y pueblos en el futuro.

Diversos autores se refieren a que nos encontramos ante un cambio civilizatorio. Entre ellos, la filósofa argentina Isabel Rauber lo caracteriza como una “crisis multidimensional del capitalismo” que se desarrolla “a partir de la participación de grandes masas populares y está asociado a un cambio sustancial del modo de vida”.

Como es de suponer, las profundas transformaciones en juego generan la contraposición entre aquellos que las impulsan

y quienes se resisten a ellas, aunque en este último caso presentadas en un nuevo formato renovado y prolífico en alusiones a la democracia, la justicia, la paz, la igualdad, la independencia y otros valores fundamentales, aunque dándoles el sentido opuesto al que han enarbolado las movilizaciones populares.

Resulta ilustrativo recordar que el ex presidente Obama, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2009, cumplió sus dos períodos de gobierno en guerra -incluso más que su antecesor Bush-, en Afganistán, Irak y Siria, que todo el mundo pudo presenciar bajo el formato de un reality show. Sus asesores cercanos sostienen que su preferencia fue el desarrollo “de operaciones encubiertas limitadas”. En ellas podemos encontrar la explicación de la lógica que sostiene hasta la fecha el bloqueo contra Cuba y el asedio sobre los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, entre otros países de la región.

La nueva performance tiene su réplica en nuestro país. Luego de sostener que la lucha de clases o el imperialismo son temas ya superados y pretender excluirlos del lenguaje político, los sectores vinculados al modelo en crisis han construido un nuevo relato ajustado al reestreno de su imagen pública, que en torno a la globalización incluye grandes temas estructurantes de la política exterior como la solución pacífica de las diferencias, la interrelación y cooperación de los países, crecimiento y desarrollo, la paz social, la democracia y los derechos humanos, entre otros, aunque enfocados desde sus mismas concepciones liberales de siempre para utilizarlos como caballo de Troya, tanto en la arena internacional como al interior del país. Detrás de la apariencia, el uso de los mismos términos pero con sentido contrapuesto termina por vaciarlos de su contenido histórico.

El origen del doble discurso tiene implícitos postulados como el de Theodore Levitt, que en base a los principios del liberalismo apunta a la limitación de los poderes y fun-

4 (Bs. Aires, CLACSO/EUDEBA. 1999).

ciones del Estado, la defensa de la propiedad privada y un supuesto derecho natural (*ius naturalis*), que se ubicaría por sobre las leyes humanas.

Este relato, que procura interpretar la confrontación de Sócrates con los sofistas acerca de la distinción entre aquello que estaba dictado por la naturaleza (*physis*) y lo establecido por la razón humana (*thesis*), es tomada como recurso para enmascarar la defensa de sus intereses de clase, en tanto apela a la existencia de un cierto orden trascendente, aunque sin señalar quién establece los contenidos de tales preceptos. De este modo, la pretensión de deducir el derecho natural a partir de un supuesto orden justo y bueno, universal y trascendente, conlleva a la justificación, en nombre de ese mismo orden, de leyes aún más peligrosas para la sociedad - real y actualmente existente -, que aquellas que determine un Estado legítimamente conformado.

Nuevamente, Marx y Engels

El mundo ha cambiado acelerada y profundamente, aunque no lo hace sobre una página en blanco. El Manifiesto Comunista, publicado por Marx y Engels en 1848, señala que "toda la historia de la sociedad humana, hasta nuestros días, es una historia de la lucha de clases". La definición ve reafirmada su vigencia a la luz de los hechos, aun cuando lo hace conforme a las complejidades de hoy y no como un dogma congelado en el tiempo, pues se trata de una ideología que postula la evolución del pensamiento de manera inseparable de la realidad concreta, que en este caso teoriza acerca de la regularidad que ha sustentado - "hasta nuestros días" -, los cambios de época, civilizatorios, de las formaciones históricas que han regido a la sociedad humana.

Así como el Manifiesto consigna los efectos que tuvo el llamado descubrimiento de América, el desarrollo de la circunnavegación de África, la apertura de los mercados de Oriente, el surgimiento de nuevos medios de cambio, del comercio y la industria que generaron un salto que

llevó a transformar el feudalismo en decadencia; en nuestros días ocurre lo propio con la incorporación del desarrollo de la informática y la innovación tecnológica, la robótica y su impacto en las formas de producir, de las comunicaciones, de las nuevas formas de explotación del trabajo humano y acumulación de la riqueza, de la circulación y apropiación del conocimiento, de las formas de la confrontación de clases y la relación de la cultura de masas y los movimientos sociales con la lucha política. Se vive de otra manera y la lucha de clases incorpora nuevas formas, canales, ritmos y escenarios, pero continúa siendo el origen de la confrontación.

Sin pretender una extendida defensa del marxismo, pareciera pertinente su mención para el cuadro en desarrollo, con mayor razón cuando se le caracteriza como cambio civilizatorio. Abordarlo de otro modo nos podría derivar a la lógica de "plantar un sauce para que salga agua", eludiendo las causas de fondo que originan la crisis.

Valores universales con vinculación histórica.

La formulación de valores universales desprovistos de su vinculación histórica concreta, de la presentación del texto sin su contexto, ha derivado en la generación de una suerte de categoría absoluta que en la vida terrenal opera más como recurso a ser discrecionalmente utilizado en auxilio de concepciones predeterminadas, según convenga o no a esos propósitos y a menudo más centrados en eludir la contradicción de fondo que en avanzar a su superación.

La situación compromete especialmente a los espacios multilaterales, que se ven cruzados por la utilización homónima de mismos términos para referir ideas o sentidos distintos, cuando no abiertamente contradictorios.

Así, la libertad puede ser aludida tanto en favor de los grandes conglomerados empresariales como de la independencia

y autodeterminación de los pueblos; la integración regional tanto en el marco de la hegemonía de Estados Unidos como para zafarse de ella; o que los mismos que han guardado riguroso silencio ante las violaciones de los derechos humanos por gobiernos como los de Colombia, Chile y otros países, sin embargo clamen por el establecimiento de sanciones contra los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, más como represalia por la contraposición de esos países con Estados Unidos que por un resguardo sincero de los derechos humanos que ellos no respetan en sus propios países.

Lejos de pretender presentar los antecedentes proponiendo una suerte de lógica del empate – lo que sería una frivolidad monstruosa –, se trata de evidenciar la utilización de los preceptos señalados con fines engañosos y hasta contradictorios con su verdadera defensa y su contexto real.

Una característica propia de la globalización es que, dada la dimensión de los temas planteados por ésta, los países adopten su posición ordenados en grupos en torno a visiones compartidas, lo que en este caso se traduce en la conformación de un bloque alineado con la política de Estados Unidos para la región, cuyo propósito permanente tiene como base cerrar los caminos a quien cuestione su hegemonía. En este caso, la prioridad está fijada para los tres países encerrados en el “triángulo rojo” al que pretende neutralizar o anular antes de que sea demasiado tarde, tanto por el acelerado curso de los cambios a escala mundial como por las elecciones agendadas para el futuro próximo en la región, que podrían modificar significativamente la posición de gobiernos que hasta ahora son sus aliados incondicionales.

La confrontación registra múltiples hitos. Entre ellos la invasión militar de Bahía Cochinos de Cuba en 1961 o la mantención por seis décadas del bloqueo contra la isla decretado por Estados Unidos desoyendo las reiteradas votaciones en contra de Naciones Unidas; el amagado golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez en

Venezuela en abril de 2002; o las operaciones de la CIA para sostener a la contrarrevolución armada en Nicaragua mediante el narcotráfico y el tráfico de armas desde México en los años ochenta. Es evidente que en ninguno de esos casos la motivación ha sido la verdadera defensa de los derechos humanos en su original y pleno sentido, establecido por la Carta de 1948 de Naciones Unidas con el propósito de que nunca más la humanidad volviera a padecer el holocausto desatado por el fascismo en la II Guerra Mundial. El texto en esa ocasión fue suscrito transversalmente con la participación de China, la URSS y los denominados países occidentales. Desde esos contenidos, en lo sucesivo considerados pilares del Derecho Internacional, los derechos humanos han sido piedra angular de la autodeterminación de los pueblos para definir soberanamente su propio destino.

Hasta hoy no han existido procesos que se pudieran catalogar como perfectos, y lo más probable es que ello tampoco ocurra en el futuro. Se trata en todo caso de una constatación afortunada, porque sostener lo contrario equivaldría a negar la permanente evolución de las sociedades y suscribir la resignación oscurantista de que nos encontraríamos ante el fin de la historia. Es pertinente en este marco la consideración de que tanto Cuba como Nicaragua y Venezuela son países regidos conforme a las normas internacionales de un Estado de Derecho. Asunto distinto es que haya quienes, más allá de sus diferencias políticas que pudieran sostener con la orientación de esos gobiernos, se involucren en la campaña internacional encabezada por Estados Unidos para derribarlos mediante prácticas que transgreden los mismos principios que dicen defender.

Uno de los casos que grafica esta lógica y se ha ubicado en el centro de la escena internacional con el apoyo de un gigantesco despliegue comunicacional, es el de Nicaragua, donde la detención o inhabilitación de 37 personeros de la oposición por el sistema judicial ha desatado una campaña

internacional con el presidente Joe Biden en la primera línea.

Más allá de la opinión particular acerca de las medidas aplicadas las semanas previas a la elección, resulta relevante consignar que éstas fueron dispuestas por el sistema judicial del Estado en virtud de la figura de conspiración sediciosa contemplada en su legislación, normativa legal que también existe en el Código Penal de Estados Unidos, Canadá, España, Colombia, Australia o Hong Kong, y que sin embargo pasa inadvertida cuando se aplica en esos países y no genera la campaña internacional de deslegitimación e imposición de sanciones que presenciamos frente al gobierno del país centroamericano.

En Estados Unidos se considera un crimen federal cualquier acto que "organice, ayude o intente organizar una sociedad, grupo o conjunto de personas que enseñen, promuevan o alienten al derrocamiento o destrucción del gobierno". Más aun, luego de los atentados a las torres el 11-S de 2001, mediante la aprobación de la "Ley Patriota" se confirmaron las prerrogativas para que el Presidente determine quiénes han planificado, autorizado, ayudado o realizado actos hostiles o ataques contra Estados Unidos y su gobierno.

A diferencia de lo ocurrido en 1948 en torno a la Carta de Naciones Unidas, cuando se alcanzó un acuerdo transversal de los países acerca del sentido de los Derechos Humanos para impedir la reedición del espeluznante baño de sangre provocado por el fascismo, la comunidad internacional de nuestros días se encuentra cruzada por la definición de los principios que deberán regir la convivencia de la comunidad mundial en la nueva era, y donde la superación del neoliberalismo sigue siendo el aspecto central e ineludible.

La solución es política.

La globalización ha colocado a Chile en una encrucijada. La orientación de su política exterior desde el inicio de la transición, centrada en el impulso de sus relaciones comerciales con el mundo bajo los tér-

minos del consenso de Washington para acceder a los mercados globales, se ha traducido en la profundización de las políticas neoliberales que derivaron en la acentuación de extractivismo y la subordinación asimétrica de nuestra economía frente a las grandes potencias y consorcios multinacionales; se ha multiplicado la creación explosiva de zonas de sacrificio con el consiguiente drama social y ambiental en aras de un crecimiento macroeconómico, que no se traduce en desarrollo y en lugar de ello ha agravado la desigualdad, la concentración de la riqueza y la especulación de capitales privados.

Según cifras de la Cepal, durante 2020 la economía de los países de la región sumó 22 millones de nuevos pobres. Las cifras también señalan la paradoja de que en el mismo período de la pandemia, las grandes fortunas de la región incrementaron su riqueza en un 40 por ciento. Nuestro país no ha sido una excepción.

Si concordamos que nos encontramos ante el inicio de una nueva era caracterizada por la interconexión o interdependencia de países y pueblos, que compromete y modifica como nunca antes las formas de vida individual y colectiva de toda la sociedad, igualmente deberíamos concluir en la necesidad impostergable de democratizar la política exterior mediante la participación efectiva del conjunto de la sociedad en la adopción de tales definiciones, cuyas decisiones desde los años de dictadura se han restringido a grupos reservados, tecnocráticos y afines al modelo vigente, que determinan a puerta cerrada la ruta estratégica del país. Chile ha sido un laboratorio ante los ojos del mundo sobre la aplicación del neoliberalismo, que ha tenido como base la exclusión del pueblo y la falta de democracia en la definición y aplicación de estas políticas.

La solución de la crisis, a fin de cuentas, será política. Las grandes definiciones estratégicas que están en juego son relevantes e impostergables tanto para los destinos de nuestro país como para el conjunto de la humanidad, amenazada como nunca antes en la historia por la destrucción del planeta.